



Poner a las personas antes que los beneficios económicos

Respuesta compartida del Grupo de Trabajo de Política Económica a la crisis del
COVID-19
Abril 2020

La pandemia de COVID-19 revela los fracasos del sistema económico mundial y profundiza sus injusticias y desigualdades inherentes. [La Carta común para la lucha colectiva](#), inicialmente redactada por miembros del movimiento y adoptada por la Red-DESC a fines de 2016, describe cinco condiciones que las comunidades de todo el mundo enfrentan, incluyendo el empobrecimiento y el despojo en medio de la abundancia, la profundización de la desigualdad, la captura corporativa de la toma de decisiones de los gobiernos, el cambio climático y la represión creciente.

Esta Carta común, a su vez, ha proporcionado un punto de partida para el Proyecto de Crítica Sistémica del Grupo de Trabajo de Política Económica, que recientemente lanzó una [Cronología del Capitalismo](#) y unas herramientas de educación política popular relacionadas, que vinculan estas condiciones con nuestro actual sistema económico global. Esta cronología revela que el capitalismo —como un sistema que prioriza la privatización y la competencia y que depende de la desigualdad y la explotación— tuvo un comienzo, ha cambiado con el tiempo y puede transformarse.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la medición principal de cualquier sistema o política económica es su impacto en las personas, especialmente las más vulnerables, y su papel para facilitar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos, culturales y ambientales, principalmente por parte de los gobiernos, en base a los recursos máximos disponibles y a la asistencia y a la cooperación internacionales.

Mientras COVID-19 devasta la economía del mundo, la [Organización Internacional del Trabajo](#) estima que, al final de la crisis, 25 millones de personas pueden perder sus empleos, siendo los



jóvenes, los trabajadores mayores, las mujeres y los migrantes los que soportan la carga desproporcionada de esta crisis laboral, ya que las mujeres están "sobrerrepresentadas en los empleos mal remunerados y en los sectores afectados" y los migrantes que enfrentan vulnerabilidades "debido a la falta de protección social y [acceso a] derechos".

El [Kairos Center](#) señala que esta crisis afectará desproporcionadamente a 140 millones de residentes estadounidenses pobres y de bajos ingresos. Estas ideas son recogidas por el [Law and Society Trust](#) en Sri Lanka, donde el 60 por ciento de la población trabaja en la economía informal y "muchas personas se ven obligadas a elegir entre el riesgo de contraer y propagar el virus y perder su trabajo, no poder pagar la renta y luchar por alimentar a sus familias".

La [UNCTAD](#) confirma que la crisis económica emergente tendrá un impacto mayor en el sector más bajo de la escala económica, incluyendo a las personas que trabajan en algunos sectores de servicios. En Sudáfrica, los habitantes de los asentamientos marginales están enfrentando desalojos forzosos y la demolición de sus viviendas durante la pandemia. Anticipando nuevamente que "podrían ser los pobres del mundo, más de un billon de los cuales viven en asentamientos, los más afectados", [Abahlali baseMjondolo](#) enfatiza que "no parece posible evitar que este virus se propague cuando aún vivimos en el barro como los cerdos, cuando en muchos asentamientos no hay agua, o cientos de personas comparten un solo grifo, y muchos asentamientos carecen de acceso a saneamiento ". En Zimbabwe, un miembro señaló: "A pesar de no contar con ningún ingreso durante el cierre, el gobierno no suspendió el pago de los servicios sociales ni proporcionó ninguna facilidad para para proteger a los pobres durante este período de cierre".

Al analizar las respuestas gubernamentales, el [Centro de Derechos Económicos y Sociales](#) revela que, incluso los países más ricos están abrumados por contener la pandemia y hace un llamado por un enfoque basado en los derechos humanos en la formulación paquetes de estímulo económico para proteger a los pobres. Sin embargo, muchos gobiernos se están enfocando en [rescatar](#) a las corporaciones con fines de lucro; y, existe un gran riesgo de que la crisis sea utilizada por las empresas comerciales como una oportunidad para expandir sus mercados y ganancias, incluso en



sectores como la educación, en donde los principales actores globales tecnológicos se encuentran [bien posicionados](#).

Destacando la larga historia de programas de ajuste estructural que hicieron de la educación, el agua y otros servicios esenciales “blancos para 'obtener ganancias' y la privatización a expensas de “muchas mujeres y comunidades marginadas en Asia y el Pacífico, la organización Asia Pacific Women Law and Development ([APWLD](#)) destaca que "el [Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional](#), anunciaron su respuesta neoliberal [a la crisis] en forma de nuevos 'préstamos de emergencia' dirigidos a los países pobres donde los sistemas de salud son los más débiles y las personas son más vulnerables".

Incluso en Europa y América del Norte, los hospitales públicos están abrumados; y, en consecuencia, enfrentan un aumento del número de vidas perdidas, particularmente en comunidades empobrecidas y marginadas. Los impactos desiguales de COVID-19, incluyendo clase, género, raza, etnia y estado de ciudadanía, revelan el déficit del modelo económico actual en solucionar el avance de la desigualdad sustantiva, a nivel interno y entre países. En este sentido, la pandemia está exponiendo y afianzando aún más las injusticias estructurales del sistema capitalista.

Nuestras demandas a corto plazo

- A medida que los estados se movilizan para evitar las crisis de salud pública, sociales y económicas, los miembros piden a los gobiernos que primero protejan las vidas y los derechos humanos de todos los ciudadanos y no ciudadanos, antes de brindar apoyo a los sectores corporativos y financieros, priorizando los riesgos particulares que enfrentan los trabajadores de primera línea de los servicios de salud y del sector público. Si bien las medidas apropiadas pueden variar según el país, la iniciativa egipcia [Egyptian Initiative for Personal Rights](#) por ejemplo, ha hecho un llamado por acciones urgentes a través de un "pago excepcional" ampliado a los trabajadores informales, una moratoria en las facturas de servicios públicos y en los impuestos para personas de ingresos bajos y medianos, un



aumento en los beneficios en efectivo a través de las pensiones de la seguridad social; y, mayores asignaciones para pan subsidiado y otros bienes.

- Los miembros exigen el cese inmediato de los malos tratos, los arrestos y los castigos relacionados con los [toques de queda y los cierres económicos](#).
- Los pagos de la deuda soberana y los préstamos deben suspenderse o cancelarse inmediatamente para los países en desarrollo, en base a los principios de derechos humanos de asistencia y cooperación internacional, para permitir el uso de los recursos máximos disponibles para contener el impacto de COVID-19; y, respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.
- El G20 debería garantizar el flujo de recursos a los países más pobres; Su reciente [promesa de defender la economía global](#) contra la pandemia de COVID-19 debe ser redirigida desde un apoyo no específico enfocado en la renovación del crecimiento global y la estabilidad del mercado, hacia la garantía de los derechos humanos en las respuestas inmediatas a COVID-19 y los procesos de recuperación.
- Con el fin de garantizar los máximos recursos disponibles para hacer frente a la pandemia y poder avanzar los derechos humanos, la eliminación global de los flujos financieros ilícitos, los paraísos fiscales y las exenciones fiscales para las empresas deben seguir siendo una prioridad.
- Los gobiernos deberían bloquear cualquier uso de la crisis COVID-19 que facilite la comercialización o la privatización de servicios esenciales, incluyendo un cuidado particular en no transferir datos o la gestión de ciertos sectores, como la educación, la atención médica o el agua y el saneamiento a empresas multinacionales.

Demandas a largo plazo: El avance de modelos económicos alternativos post-COVID-19



La Red-DESC y sus miembros abogan por alternativas transformadoras al modelo socioeconómico dominante, que estén basadas en la realización de los derechos humanos y en la justicia social para todos. Los movimientos sociales y las comunidades indígenas ya están implementando modelos alternativos que incluyen la solidaridad social, las cooperativas y las economías participativas. El Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia ([AIPP](#)) destaca las prácticas indígenas de larga data, vitales para la sobrevivencia y el bienestar de las comunidades, que sirven como "una declaración de compromiso colectivo de la comunidad para restablecer el equilibrio de la naturaleza y apoyarse mutuamente en la mayoría tiempos cruciales".

El [Centro Kairos](#), a través de la Campaña de los Pobres, insiste en que el análisis, las demandas y las alternativas de las personas pobres son, en última instancia, vitales para transformar las estructuras socioeconómicas y las narrativas morales distorsionadas que perpetúan la pobreza, el racismo, el militarismo y la devastación ecológica. Del mismo modo, sugiere que "los movimientos feministas y de los pueblos deben estar en el centro", [APWLD](#) argumenta que "el mundo tiene suficiente riqueza" para hacer realidad los derechos humanos, incluidos los servicios públicos de salud universal y la protección social, y que "solo se requiere la voluntad política para su implementación. "

[FIAN International](#) está monitoreando y abogando por el derecho de las personas y las comunidades a la alimentación y la nutrición, elevando las "soluciones alternativas" de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Compartiendo una visión de muchos "activistas de los derechos de las mujeres", el grupo International Women's Rights Action Watch Asia Pacific ([IWRAW-AP](#)) argumenta que "un mundo diferente, menos dependiente de las demandas del capitalismo es posible, después de todo; pero, requiere valorar la vida humana por encima de los intereses comerciales ... en base a los principios de derechos humanos de igualdad, no discriminación y respeto por el planeta".

La Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ([GI-ESCR](#)) ofrece "una esperanza de que esta crisis abra un espacio para repensar cómo organizar y gobernar nuestras sociedades", sugiriendo que "los derechos humanos, como marco y movimiento; y, en particular los DESC, sean un elemento fundamental ... para exigir un cambio transformador a través de la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad y la acción colectiva ", para abordar el cambio climático, la desigualdad y la necesidad de servicios públicos fuertes.